

Bogotá D.C., viernes 18 de agosto de 2023.

**Honorables Magistrados**

**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA**

**SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A**

**M.P. Dra. BERTHA LUCY CEBALLOS POSADA**

[rmemorialessec03satadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:rmemorialessec03satadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co)

**E. S. D.**

<b>Medio de control:</b>	REPARACIÓN DIRECTA – Art. 140 del CPACA
<b>Demandante:</b>	INCUBADORA SANTANDER S.A.
<b>Demandados:</b>	NACIÓN – DAPRE – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – POLICÍA NACIONAL Y OTROS
<b>Radicado:</b>	250002336000 <b>20230027600</b>
<b>Asunto:</b>	Recurso de reposición -parcial- en subsidio apelación. Auto Admisorio

**ALBERTO YEPES BARREIRO**, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.145.017 y portador de la Tarjeta Profesional de Abogado No. 29.629 del C. S. de la Judicatura, obrando como apoderado especial de **INCUBADORA SANTANDER S.A.** dentro del proceso de la referencia, con el respeto acostumbrado me permito interponer recurso de reposición -parcial- y subsidiariamente recurso de apelación en contra del auto de fecha 11 de agosto de 2023, notificado por estado el pasado 15 de agosto de 2023, a través del cual se admitió la demanda interpuesta, excluyendo al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República - DAPRE- de la parte pasiva de la litis. Lo anterior con fundamento en lo siguiente:

### **I. PROCEDENCIA**

El recurso de reposición es procedente de conformidad con lo dispuesto por el artículo 242 de la Ley 1437 de 2011, en tanto no está prohibido por el ordenamiento procesal.

Igualmente, frente a la petición subsidiaria, el artículo 243 numeral 1 del mismo estatuto, dispone que será apelable el auto que rechace la demanda, cuestión que materialmente ha sucedido en este caso frente al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en razón a que la decisión del Despacho ha sido excluirlo como parte pasiva de la litis.

Finalmente, el artículo 244 numeral 1 de la misma Ley 1437 de 2011, modificado por la Ley 2080 de 2021, dispone que apelación podrá interponerse directamente o en subsidio de la reposición.

## **II. OPORTUNIDAD**

El recurso se interpone en tiempo en la medida en que se dirige a controvertir una providencia notificada el pasado 15 de agosto de 2023.

## **III. EL AUTO RECURRIDO**

El auto admisorio de la demanda proferido por el Despacho, integra la parte demandada de la litis, excluyendo al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en razón a que este organismo no tiene funciones relacionadas con la conservación de la seguridad y el orden, o la protección de los habitantes del territorio nacional, ni representa legal o judicialmente al Jefe del Estado.

La decisión se sustenta así:

*“2. La parte demandante justificó en concreto la atribución de responsabilidad contra cada una de las entidades demandadas, lo que se sintetiza en la aludida omisión en las funciones y deberes relativos a la adopción oportuna de medidas para levantar los bloqueos viales y/o mitigar su impacto.*

*3. Así lo hizo respecto del presidente de la República, pero no justificó la vinculación del Departamento Administrativo de la República – DAPRE, ni el despacho encuentra razón que justifique la legitimación en la causa por pasiva de esa entidad<sup>2</sup>.*

*4. En ese sentido, en la demanda se afirmó que el Jefe de Estado omitió conservar el orden público y restablecerlo donde fue alterado pues, entre otras cosas, «no propició los escenarios y las herramientas tendientes a prevenir las situaciones que potencialmente podían afectar la protesta*

*pacífica». También porque, a su juicio, las medidas que adoptó para levantar los bloqueos viales fueron expedidas de manera tardía.*

*5. Esa razón no justifica la comparecencia del DAPRE, pues la competencia de ese organismo se limita a la asistencia y apoyo a la labor del presidente de la República<sup>3</sup>, pero no tiene función relacionada con la conservación de la seguridad y el orden, o la protección de los habitantes del territorio nacional, ni representa legal o judicialmente al Jefe de Estado<sup>4</sup>.*

*6. En consecuencia, no se admitirá la demanda en contra del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, pero sí respecto de las demás autoridades demandadas contra las que la parte demandante realizó una imputación fáctica y jurídica concreta.”*

#### **IV. RAZONES DEL RECURSO**

De manera respetuosa me permito exponer a la señora Magistrada las razones por las cuales consideramos que debe revocarse parcialmente el Auto, en lo que tiene que ver con la decisión de excluir al DAPRE de la parte pasiva de la presente litis.

En efecto, las actuaciones tardías y las omisiones en el cumplimiento de los deberes que le asistían al Presidente de la República y que fueron suficientemente sustentados en el escrito de la demanda, constituyen una hecho atribuible al DAPRE en la medida en que la Presidencia de la República, en los términos del artículo 56 de la Ley 489 de 1998<sup>1</sup>, está integrada por el conjunto de servicios auxiliares del Presidente de la República y su régimen es el de un Departamento Administrativo.

Así lo ha reconocido reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado, en donde se ha establecido que el DAPRE está legitimado en la causa por pasiva por las actuaciones del Presidente de la República y como consecuencia de ello, además, ha sido condenado a la reparación de los perjuicios causados por las actuaciones de la Presidencia.

---

<sup>1</sup> ARTICULO 56. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Corresponde al Presidente de la República la suprema dirección y la coordinación y control de la actividad de los organismos y entidades administrativos, al tenor del artículo 189 de la Constitución Política.

La Presidencia de la República estará integrada por el conjunto de servicios auxiliares del Presidente de la República y su régimen será el de un Departamento Administrativo.

A través de sentencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, expediente 25949, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, reiterada además por las sentencias de 16 de julio de 2015, exp. 34046, C.P. Hernán Andrade Rincón y de 8 de junio de 2017, exp. 41307, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo, la Corporación afirmó:

*La Sala no le encuentra razón al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República cuando afirma que no se encuentra legitimado en la causa por pasiva para actuar en el presente proceso; en primer lugar, porque aun cuando el Presidente de la República existe como órgano en el ordenamiento jurídico colombiano, a tenor de lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política<sup>30</sup> y que en la expedición de los actos administrativos por medio de los cuales se instauró la “zona de despeje” intervinieron además del Presidente de la República, los Ministros del Interior, de Justicia y de Defensa, no es menos cierto que las mencionadas Resoluciones provinieron del propio Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, entidad pública demandada en este proceso y que, tal como lo define el artículo 56 de la Ley 489 de 1998, la Presidencia de la República “estará integrada por el conjunto de servicios auxiliares del Presidente de la República y su régimen será el de un Departamento Administrativo”. **En este orden de ideas, y bajo el entendido que las actuaciones del Presidente de la República requieren de los servicios administrativos del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, es éste último órgano el llamado a actuar en el proceso judicial y a responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que puedan ocasionar las decisiones del Jefe del Estado o sus actuaciones.** Por otro lado, no escapa a la Sala el hecho de que, tal y como se desprende de la motivación de la Resolución No. 7 del 5 de febrero de 1999, la decisión de crear la zona de despeje correspondió a la materialización de una política de paz impulsada directamente por el propio Presidente de la República, aun cuando para ello hubiere sido necesaria la intervención del Gobierno Nacional; en efecto, en el mencionado acto administrativo se indicó que “el Presidente de la República, desde que tomó posesión de su cargo ha venido liderando en lo político, económico y social, las acciones que permitan la reconciliación de los colombianos, en desarrollo del mandato constitucional contenido en el artículo 22 de la Constitución Política de Colombia”, a lo cual se añadió que “el Gobierno Nacional y los representantes de las FARC EP, acordaron iniciar los diálogos en una zona de*

*distensión comprendida por los municipios de Mesetas, La Uribe, La Macarena, Vista Hermosa y San Vicente del Caguán” (fl. 158 c 1). (subrayas y resaltado fuera de texto).*

En este orden, cuando se argumenta que el daño proviene entre otras razones, de la expedición tardía del Decreto 575 del 28 de mayo de 2021, proferido por el Presidente de la República con la intervención del Ministro del Interior, ello no es óbice, para que se pueda endilgar responsabilidad a la Nación - Presidencia de la República, situación que solo es posible si procesalmente este organismo está representado legítimamente por el DAPRE, en razón a lo regulado en el artículo 56 de la Ley 489 de 1998.

Así por ejemplo, el Consejo de Estado, a través de la Sentencia del 12 de octubre de 2017 proferida por la Sección Tercera Subsección B Consejero ponente DANILO ROJAS BETANCOURTH Radicación número: 41001-23-31-000-2005-00044-01(42098) Actor: RICARDO GÓMEZ MANCHOLA Y OTROS Demandado: NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA, POLICÍA NACIONAL Y OTROS, al desatar el recurso de apelación interpuesto dentro de un proceso de reparación directa, decidió:

*SEGUNDO: **DECLARAR a la Nación representada por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República,** el Ministerio del Interior, y Ministerio de Defensa-Policía Nacional y Ejército Nacional administrativamente responsables por el secuestro de los señores Jaime Briñez Cuéllar, Carmen Nancy Ángel Muller, Aníbal Rodríguez Rojas, Natalia Rodríguez Briñez, Juan Sebastián Lozada Polanco y Jaime Felipe Lozada Polanco, ocurrido el 26 de julio de 2001 en el municipio de Neiva. (subrayas y resaltado fuera de texto).*

Corolario de lo anterior, resulta claro que los actos expedidos por la Presidencia de la República se entienden proferidos por el DAPRE y a su vez, este último forma parte de la estructura orgánica y administrativa de la Nación, por lo que cuenta con facultades para representar la Presidencia.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> La citada sentencia del 12 de octubre de 2017 afirma: *La Sala no comparte los anteriores argumentos. Según se expuso en la sentencia de 12 de junio de 201329, la Resolución n.º 085 de 1998, que creó la zona de distensión, provino del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, además de que esta entidad forma parte de la estructura orgánica y administrativa de la Nación y, por lo tanto, cuenta con facultades para representarla*

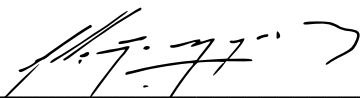
Por último, en el presente proceso resulta de toda la importancia la vinculación del DAPRE como parte demandada, si se tiene en cuenta además que la expedición tardía del mencionado Decreto 575 de 2021, resulta ser una de las causas eficientes del daño cuya indemnización se solicita sea reparada, cuestión que hace indispensable la presencia de la Presidencia de la República en la litis, a fin de establecer en debida forma su responsabilidad.

#### **V. SOLICITUD**

Con fundamento en las anteriores razones, solicito de manera respetuosa se revoque parcialmente el Auto admisorio de la demanda, en el sentido de incluir al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República como parte demandada dentro del presente proceso.

En el evento en que el recurso de reposición sea resuelto desfavorablemente por el Despacho Ponente, se le solicita a la Sección Tercera del Consejo de Estado acceder a la petición aquí fundamentada.

Respetuosamente,



**ALBERTO YEPES BARREIRO**

C.C. No. 79.145.017

T.P. No. 29.629 del C. S. de la J.